

ARTURO ANGUIANO*

MÉXICO: CONTRADICCIONES E INCERTIDUMBRES DE UN PROCESO DEMOCRÁTICO TRUNCO

A POCOS AÑOS DE LA HISTÓRICA ELECCIÓN del 2000 en la que fue electo como presidente de la República Vicente Fox Quesada, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), resulta evidente que ha fracasado la famosa transición democrática que supuestamente debía concluir con la alternancia política en el gobierno, esto es con el fin del largo dominio del transfigurado régimen de la Revolución Mexicana. Los votos que entonces se agolparon con el solo objetivo de acabar con la dominación simbolizada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pronto mostraron su inutilidad y mala apuesta al integrarse un gobierno abiertamente empresarial que no haría sino repetir las mismas políticas neoliberales, impregnadas de un fundamentalismo religioso que no ha hecho sino profundizar la vía conservadora. El consenso que entonces se construyó se ha derruido y el desencanto, el enojo e incluso la polarización y desesperación en la sociedad se manifiesta en todos los sectores (de empresarios a la jerarquía eclesiástica, pasando por partidos y organismos civiles de toda índole). La economía que el primer presidente de la era pospriísta,

* Doctor en Ciencias Sociales por la Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne. Profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (México) desde 1976. ex Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Vicente Fox Quesada, prometió hacer crecer, apenas se ha sostenido a flote, azotada y cimbrada constantemente por las oscilaciones de la economía norteamericana, a la que aquella se encuentra supeditada como nunca luego de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ya con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), México se había enganchado al primer mundo por la vía del TLC que en el fondo significó la consagración de la completa supeditación de la economía mexicana a los ritmos, exigencias y debilidades de la estadounidense. El llamado gobierno del cambio, encabezado por Fox, un antiguo empleado de la Coca Cola, prosiguió las mismas acciones, alentó y profundizó las mismas tendencias económicas, sociales y políticas, por lo que más pronto que tarde comenzó a perder la credibilidad que le habían concedido los votos y en particular la derrota del candidato priísta que apareció en su momento como un parteaguas histórico.

EL PRIMER CAMBIO DE FONDO: ELECCIONES CREÍBLES

El simple respeto de los votos para la elección de los distintos cargos, principalmente el de presidente de la República, si bien representa una novedad significativa que inaugura el siglo veintiuno mexicano, para nada ha abierto cauces para un cambio a fondo del régimen político y su funcionamiento. La caída del PRI aflojó algunos de los nudos corporativos y patrimoniales con los que durante décadas se confiscó a la sociedad los espacios políticos y las formas de participación y vida democrática. Pero a lo largo y lo ancho de la nación perviven y se reproducen inclusive de manera ampliada las relaciones clientelares y jerárquicas, la opresión y el sometimiento, la injusticia y la falta de libertades, la persecución del diferente o inconforme, así como todos los reflejos autoritarios de un régimen excluyente que nunca toleró la diversidad, el igualitarismo ni la democracia.

En muy poco tiempo el gobierno del cambio se transfiguró en una caricatura grotesca del gobierno priísta, poniendo en evidencia en última instancia el arraigo y la fuerza de métodos, prácticas, relaciones y condiciones que el viejo régimen convirtió en una cultura política que no solamente no desaparece, sino que determina e impregna al gobierno panista y al conjunto de los actores políticos institucionales. Incluso, Vicente Fox concluirá su mandato con un año terrible en el que con ostentación se ha logrado la reproducción de los peores vicios-rasgos del régimen priísta: ataque a la frágil autonomía sindical con la imposición vertical de dirigentes en los sindicatos; la violencia represiva contra los movimientos sociales, como los de los mineros de Lázaro Cárdenas, Las Truchas, Michoacán; y la violación generalizada a los derechos humanos en la agresión desmesurada dirigida a castigar a los

combativos pobladores de San Salvador Atenco, en el estado de México. Todavía más, unas elecciones, el pasado 2 de julio, que recuerdan las elecciones de Estado manejadas por el PRI, con la utilización ilegal de vastos recursos estatales, la presencia avasallante de los medios de comunicación y que, como antes, aparecen marcadas por el fraude.

De hecho, todo lo que existía, sigue existiendo pero –como suele suceder en los procesos históricos de cambio– degradado, en descomposición, con nuevos elementos por supuesto (democráticos, federativos, aun endebles), que sin embargo no cristalizan, por más que se presenten como la democracia por todos tan deseada. Si bien debilitada y con poca capacidad de negociación, la maquinaria corporativa sigue funcionando y sus envejecidos manejadores oscilan entre fidelidades añejas y actuales, pero en lo fundamental se mantienen supeditados a la presidencia de la República. El llamado régimen de partido de Estado se desplomó desde el momento en que el presidente dejó de encarnar la amalgama indiferenciada de la representación estatal y la maquinaria de control y reproducción de la clase política y del consenso por la vía de procesos electorales ficticios.

Empero, el fin del régimen de partido de Estado que representaba el PRI-gobierno no ha acabado con el Estado faccioso, esto es el Estado-partido que se recompone con el PAN a nivel federal y con el propio partido del gobierno y los otros partidos a nivel de los estados. Por todas partes se reproduce la amalgama del aparato estatal y el partido, por más que éste sea otro. La ilusión de la comunidad estatal diversa y plural condensada en sus contradicciones por el Estado, así como de la pretendida representación universal que éste expresa en tanto complejo de relaciones sociales, se hacen añicos cuando en realidad prospera una relación de fuerzas específica que sesga la acción del conjunto del aparato estatal y redefine el poder en forma mafiosa. Más que representar a la sociedad toda, el Estado subyuga y disgrega a los núcleos sociales subordinados y potencia como nunca los intereses del capital financiero mundializado.

El corporativismo y el presidencialismo prosiguen articulando al régimen político mexicano con su caudal de relaciones clientelares y jerárquicas, habilitadas y reproducidas gracias a la corrupción multiforme, como nunca diversificada y generalizada. Tal vez lo nuevo sea que el presidencialismo no ha logrado reafianzar los rasgos que lo volvieron omnisciente y todopoderoso y en cambio vaya perdiendo sin remedio el halo cuasi místico que lo caracterizaba y se pulverice poco a poco su autoridad, su capacidad de acción, de mediación y de negociación. Por esto el poder parece fragmentarse regionalmente, localmente, donde se reproducen sin embargo los mecanismos y relaciones presidencialistas, corporativos y clientelares. El centralismo

institucional sigue operando si bien debilitado, mientras la nación se fragmenta como a principios del siglo pasado en poderes regionales e incluso autónomos. Si bien ya no existe centralmente la fórmula “PRI-gobierno”, se reproducen en el país –e independientemente del partido que sea–, modalidades truncas que reeditan y actualizan el manejo partidario, excluyente y abusivo del poder.

En realidad, las distintas piezas de la institucionalidad perversa que articuló esa suerte de Estado-partido que secuestró las libertades democráticas a los mexicanos, como los pretendidos tres poderes autónomos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), la federación, el municipio, no han dejado de remozarse, pero tampoco de reafirmar el predominio de un presidencialismo aparentemente venido a menos y sin embargo presente como una concepción que rige y satura todas las relaciones y articulaciones.

El presidencialismo en que se refugia el gobierno de Vicente Fox Quesada es un presidencialismo sin autoridad como el de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), tamizado con la frivolidad de la figura de la *pareja presidencial* y la ignorancia agreste de su titular, pero no parece que se dirija hacia una recomposición política que pudiera simbolizar un verdadero cambio de régimen (la tan llevada y traída reforma del Estado), ni mucho menos que se esté desembocando en un régimen democrático, como se cansan en sostener los apologistas de ayer y hoy.

Más bien, estamos asistiendo a la ampliación acotada del mismo régimen autoritario, con un presidencialismo que conserva la mayoría de sus funciones y prerrogativas, pero retocado por la personalidad inconsistente e imprevisible de su titular, sustentado en adelante en una suerte de sistema de partidos políticos que garantiza la reproducción de una nueva clase política encargada de la gestión del aparato estatal y de ocupar y dar sentido al ámbito de lo político. El régimen se ensancha, se flexibilizan ciertos canales, se matizan funciones, se recomponen las jerarquías institucionales y las otras, se reparten el poder y el botín, se rehacen ciertas relaciones, y se instaura una novedosa sociedad política de admisión reservada. Es ésta la verdadera reforma estatal “posible” desde arriba, el desenlace de la crisis del régimen priísta cerrado, excluyente y ajeno históricamente a cualquier forma de democracia; su *autorreforma*, sostenida en la transfiguración neoliberal del Estado y el fundamentalismo del mercado a ultranza que condiciona, empapa y determina a la vez todas las políticas, acciones y relaciones, independientemente de la diferencias de tono o de textura.

LA DEGRADACIÓN INSTITUCIONAL Y DE LA VIDA POLÍTICA

Pero más allá de los escenarios institucionales de la política, e incluso en éstos, el pretendido gobierno del cambio representado por Vicen-

te Fox, no solamente no ha transformado o reconstruido sobre las cenizas del rancio y decadente régimen de la Revolución Mexicana otro régimen democrático, sino que avanza desordenadamente en su temprana descomposición y declinación. De entrada, todas las piezas vigentes del régimen institucional (los llamados tres poderes, el presidencialismo corporativo, el naciente sistema de partidos) se abalanzan por la senda de la deslegitimación, la inoperancia y la crisis.

El Estado, el poder ejecutivo, encarnados como están en la persona del presidente, parecen a la deriva, sin rumbo, por más que naveguen dentro de los parámetros de las políticas neoliberales. La ignorancia y la impericia del presidente Fox no ocultan empero su fundamentalismo religioso con el que impregna sus actos ni mucho menos su supeditación a los intereses y las políticas imperiales de Estados Unidos, a pesar de las deslealtades de su amigo el presidente George W. Bush. Más allá del sonado conflicto con Cuba, destacan sus acciones dirigidas a desnacionalizar el sector energético, privatizar el agua, sobreproteger al capital financiero, especialmente a los bancos extranjeros, y desproteger a los campesinos golpeados por el TLC al igual que al conjunto de los asalariados y excluidos.

El Congreso de la Unión vive enredado en los acuerdos pragmáticos, los chantajes y negociaciones que lo paralizan la mayor parte del tiempo, pero –salvo excepción– invariablemente termina avalando las iniciativas del gobierno federal. La simulación de reforma indígena, a contracorriente de los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno de Ernesto Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sólo fue el caso más odioso de colusión de intereses contrarios a los sectores sociales excluidos. Los congresos –el federal, como los locales– obedecen más a los intereses facciosos de los gobiernos y partidos de donde provienen sus miembros, que a las preocupaciones e intereses de sus pretendidos representados. El uso faccioso de la Cámara de Diputados para despojar en forma arbitraria de su fuero y su cargo al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, evidenció de manera incuestionable la crisis de la representación institucional. Como núcleo duro de la nueva clase política, su preocupación dominante está en encontrar los mecanismos para su perpetuación dentro de los espacios políticos institucionales (reelección, prolongación de los mandatos, dietas, prerrogativas, etcétera).

El llamado poder judicial es el que menos se ha renovado, sin reformas que permitieran transformar los mecanismos de integración, su composición y su funcionamiento. El presidente sigue teniendo un peso decisivo en la designación de sus miembros y de los jueces. La procuración de justicia carece de autonomía y se encuentra subordinada política y orgánicamente a los titulares de los poderes ejecutivos

(nacional y estatales). Los miembros del poder judicial –incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– aparecen desde siempre y todavía como una oligarquía cerrada, privilegiada, antidemocrática, sin legitimidad, en un país legalista, plagado de leyes, pero sin legalidad clara, incuestionable. Es la parte más rancia de la clase política y su desempeño refrenda la debilidad de un estado de derecho que no rige, sino se interpreta a conveniencia de los poderes.

Los partidos políticos y en general el sistema de partidos que se ha pretendido destacar como la expresión más patente del cambio democrático en el país, viven una crisis temprana de credibilidad e identidad. Beneficiarios de un sistema construido por ellos mismos, han ocupado en forma excluyente el cada vez más estrecho espacio de la política. La ausencia de democracia en el país los formó y condicionó hasta reproducir en sus estructuras y reglas de funcionamiento los mismos hábitos e inercias autoritarias, clientelares y evidentemente corruptas que caracterizaban y siguen caracterizando el régimen político. Los miembros activos fueron reemplazados por funcionarios pagados a manos llenas, gracias a los dineros públicos que los propios partidos se asignaron generosamente por cumplir los requisitos legales que ellos mismos acordaron. El sistema de *franquicias* electorales excluyó a la sociedad al tiempo que permitió la ampliación de la clase política profesional que opera la política como un oficio de especialistas. Sin más vínculos con la sociedad que los clientelares, sin referencias programáticas ni lecturas de la realidad que los identifiquen, los partidos se han mimetizado entre ellos, volviéndose indiferenciados y regidos por la misma cultura política clientelar que caracterizó al príismo. Sus luchas internas por el poder y el dinero, así como sus recurrentes escándalos, no son sino parte del espectáculo político que se ofrece a la sociedad, a los espectadores que son la inmensa mayoría de los integrantes de ésta.

El que por fin las elecciones institucionales se realicen bajo la organización y supervisión de órganos electorales más o menos autónomos del poder (el Instituto Federal Electoral y sus pares estatales) y que por lo mismo los votos se cuenten y reconozcan con cierta transparencia, representa sin duda un avance pues esta fue una demanda central del movimiento democrático. Representó un primer paso hacia el surgimiento efectivo de la ciudadanía, usurpada desde siempre por el Estado y sus instrumentos político-corporativos. Pero este paso fundamental se vacía de contenido en tanto el clima de libertades sigue siendo segmentado, diferenciado, irrestricto arriba, restringido, condicionado y hasta regimentado abajo. Los derechos políticos y sociales de los distintos componentes de la sociedad mexicana continúan siendo precarios, condicionados por las necesidades de repro-

ducción del consenso y de la pretendida legitimidad del régimen que no acaba de disolver las estructuras ni los vínculos corporativos que le dieron sustento, regimentados a final de cuentas de manera que impidan la fuga de la sociedad, el progreso de formas de autoorganización y autonomía que desquicien o perturben un ámbito político articulado por la *centralidad de lo electoral*. La sociedad sigue viviendo una ciudadanía trunca, bajo vigilancia y bajo sospecha. No se tolera más política que la política institucional, estatal, que concede a los partidos registrados la exclusividad de la representación y de la acción electoral y gubernamental, esto es institucional. Las elecciones siguen sin ser realmente creíbles y la actuación del mediador –el Instituto Federal Electoral– resulta perversa, sesgada, inclinándose en forma burda hacia el poder y el partido de la derecha.

La comunidad, el pueblo, el barrio, la organización, la empresa como espacios públicos donde la sociedad delibera y decide en comunidad sobre los asuntos que le competen e involucran vitalmente, es decir donde hacían y hacen política los de abajo, son sometidos al embate que los disgrega y paraliza, buscando dirigirlos hacia los cauces institucionales resguardados, esto es hacia los partidos y sus métodos clientelares de representación y gestión. Por todas partes se reproducen y afirman en consecuencias las relaciones clientelares, la corrupción, la supeditación, la represión multiforme contra quienes desbordan las formas restringidas de participación política que caracterizan la “nueva” institucionalidad acondicionada bajo el signo del “cambio”. Como siempre, el poder teme la movilización de la sociedad y sobre todo la autonomización de sus componentes sometidos que pueden rebelarse, resistir.

La democracia, que se presume ha llegado a México bajo el aliento modernizador de la mundialización neoliberal, se compendia así en la participación electoral en torno a la cual se montan escenografías y espectáculos chuscos regulados por el sube y baja de las encuestas. El ciudadano, por fin estrenado en el país, resulta más bien un *espectador* que ve pasar una película o programas televisivos realizados por actores profesionales que pueden crearle la ilusión de adentrarse en ellos, llenarlos de expectativas y sueños, pero que en la práctica le resultan ajenos, volátiles, que se le sobreponen, lo manipulan y hasta terminan refrendándole su abandono y exclusión. Como parte por supuesto del cambio, también publicitado como modernización de la política, del país, se promueve la individualización plena de la sociedad, compuesta en lo sucesivo por ciudadanos poseedores de derechos individuales que se condensan en el voto recurrente. Esto es, como una suerte de ciudadanos concebidos de tiempo parcial.

Lo colectivo, lo comunitario, lo barrial o social se presentan como residuos desechables del pasado, por lo que al mismo tiempo se so-

cavan y anulan los derechos sociales, colectivos. Ni en los sindicatos, ni en las organizaciones campesinas, ni en los pueblos, ni siquiera en los partidos, se abre camino sin trabas la democracia auténtica. La pasividad individual, no la acción colectiva, es lo que se busca como sustento de la nueva democracia mexicana.

UN RÉGIMEN POLÍTICO EXCLUYENTE, OLIGÁRQUICO

Se ha impuesto, en consecuencia, la centralidad de lo electoral en todos los procesos políticos, lo que sobredetermina y redimensiona el conjunto de organizaciones, relaciones y prácticas políticas en el país. Los partidos son, de esta forma, el actor ineludible y casi exclusivo de la trama de lo político; son proyectados como entidades estatales encargadas de intervenir en las interminables campañas para la elección de los representantes institucionales a las distintas instancias (gobiernos, congresos) y de asegurar su funcionamiento. Se convierten entonces en la única vía tolerada, registrada, *legal*, para entrar en un ámbito de la política degradado a lo meramente estatal, institucional. Todos los demás –organizaciones, colectividades, pueblos, individuos– quedan fuera, condenados al marginamiento político y ya no sólo a la exclusión económico-social y cultural. Sus voces se distorsionan o sofocan, se suplantan.

Sostenidos en el financiamiento público y en mecanismos que les garantizan el monopolio de la participación política, los partidos devienen maquinarias electorales sin alma política, desideologizadas y desprogramadas. Atendidos y ocupados sólo por *profesionales* (funcionarios y empleados de aparato pagados, electos de distintos cargos), los perfiles ideológicos y políticos de los distintos partidos se difuminan bajo los requerimientos del marketing y las encuestas de opinión que gobiernan no solamente sus prácticas políticas y gubernamentales, sino incluso sus procesos internos, los que se vician y descomponen. Las vinculaciones sociales partidarias se distienden y desvanecen, asumiendo sólo la forma de relaciones mercantiles, de intercambio restringido de favores y lealtades, generalmente circunstanciales. De hecho, los partidos, todos, abandonan sus rasgos singulares, se mimetizan, reasumen y profundizan la cultura priísta, que evidentemente fructificó como una acendrada cultura política nacional antidemocrática, inequitativa, generadora de desigualdad. Las luchas y demandas de los distintos sectores de la sociedad, los requerimientos económicos, sociales, políticos, culturales de la nación, aparecen como un eco destemplado por encuestas y estudios de opinión, todos de agencias privadas. Por esto los partidos oscilan entre la frivolidad y el autismo social, atrapados por un espectáculo que montan sin preocuparse demasiado por los posibles espectadores y sus exigencias.

En la nueva *sociedad política* que caracteriza al México del siglo veintiuno, los partidos y los distintos sectores sociales siguen rumbos divergentes que no parece que puedan cruzarse. Los partidos lucen en auge, plenos de posibilidades, ricos de la riqueza pública, potenciados por los medios modernos de comunicación, partícipes de una sociedad política cada vez más exclusiva, con reglas y códigos cifrados, cohesionada por el ejercicio indiferenciado del poder y a la cual solamente se ingresa mediante una iniciación intrincada supervisada por el IFE. En cambio, la sociedad se disgrega y segmenta bajo el influjo de las políticas económicas regresivas que cancelan masivamente empleos y condenan al empobrecimiento, la emigración y la incertidumbre a capas cada vez más extensas y diversas de la población. Aunque enflaquece el conjunto de las organizaciones sociales corporativizadas y pierden éstas cualquier capacidad de negociación (supeditadas como nunca), los organismos sociales y civiles autónomos son los que más sufren el acoso por parte de un aparato gubernamental “plural” (pluripartidario, pues) que busca dislocarlos, paralizarlos, acorralarlos o cooptarlos.

Disgregados, perseguidos, acorralados, los sectores sociales subordinados se ven expulsados del terreno de la política, se les socavan sus derechos humanos (políticos y sociales) y solamente se les ofrece como alternativa factible el salvador vínculo (mercantil, clientelar) con los partidos y sus administraciones gubernamentales o las labores parlamentarias que debieran favorecerlos. Los canales institucionales se presentan como la vía para resguardar ciertas condiciones de existencia mínimas mediante el asistencialismo generalizado en tanto política social por excelencia (otra vez pluripartidaria), la tramitología ante las distintas instancias públicas y las promesas de empleos informales a cambio de los empleos precarios que acaban por perder. Aunque el campo no aguante más, se sostienen las políticas neoliberales de pretendido libre mercado –agravadas por las disposiciones del TLC– y en cambio las soluciones a las demandas campesinas vitales no afloran por ningún lado. Pueblos hostigados, comunidades en disgregación, ciudades desoladas se despueblan, emigran en busca de ilusiones y esperanzas en el desesperanzador imperio del Norte.

El mercado de baratijas impulsado por los partidos políticos y los gobiernos del cambio –y no sólo por el gobierno foxista– sitúa a la defensiva a una sociedad desconfiada que, sin embargo, parece carecer de opciones verdaderas. Los procesos electorales recurrentes son la ocasión del derroche publicitario por parte del conjunto de los partidos y de los gobiernos que se empeñan en *vender* sus candidatos con métodos mercadotécnicos que difícilmente los distinguen unos de otros, a no ser por los colores que igualmente parecen borrarse y confundirse en una enorme mancha indiferenciada y sin contornos.

Pero el escándalo mediático incluso apabullante contrasta en forma inocultable con la apatía que la gente manifiesta ante campañas electorales que jamás terminan y que difícilmente atraerán a las casillas a alguien más que a las clientelas electorales comprometidas con cada partido o partido-gobierno.

El régimen político renovado y sus partidos viven la fantasía de la política meramente estatal, integrados en una exclusiva sociedad política de responsabilidad limitada, sin ocuparse ni percatarse de los humores cambiantes de la sociedad excluida, solamente convocada a emitir un voto sin opciones ni perspectivas. Nadie quiere darse cuenta de que la nave navega a la deriva, con un capitán sin pericia ni rumbo, atrapado por la puerilidad, el desorden y el desconcierto.

La muy larga y escandalosa campaña electoral basada en una guerra sucia desmesurada y los gastos incontrolados, con la reedición de las peores prácticas clientelares del priísmo, que fabricaban elecciones de Estado, completamente inequitativas, confirmó lo lejos que estamos de haber aterrizado en un régimen verdaderamente democrático, cualquiera que fuese el adjetivo que se le pusiera. Los escándalos de la corrupción de la familia presidencia revelaron un proceso de descomposición muy avanzado que expresa una prolongada cultura política sostenida en la corrupción que nadie se ha preocupado por erradicar y transformar realmente. En los partidos, ésta tiene su origen en la ruptura de los vínculos sociales que deberían caracterizar a los partidos.

La ofensiva del desafuero que durante casi un año mantuvieron el presidente Fox y sus aliados (los principales partidos, los empresarios, los medios) para inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador (del Partido de la Revolución Democrática) como el principal contendiente a la entonces ya adelantada sucesión presidencial, enrareció y polarizó la atmósfera política nacional desde 2005, preparando el escenario de crisis política institucional que se vive ahora después del confuso y poco creíble resultado electoral del pasado 2 de julio de 2006, que concede un triunfo muy estrecho al candidato del PAN, Felipe Calderón. Desprovista de lo social, la política asume la lógica del mercado, de la competencia descarnada, la lógica de la ganancia que se impone sin escrúpulos ni principios, ni programas, ni reglas ni consideraciones éticas que valgan en la búsqueda de la competitividad y el éxito político, que no consiste sino en la acumulación de activos materiales, de cargos públicos, de audiencia. La mercadotecnia sustituye las estrategias políticas, las consultorías privadas los programas y la publicidad básicamente mediática las movilizaciones, la práctica política de los sectores sociales.

La opacidad de los partidos políticos permite todo tipo de alianzas dirigidas a alcanzar determinada política o, particularmente, acordadas

con el fin de alcanzar cargos eleccionarios de distinto carácter. Pero el espectáculo de la política, del poder descarnado, aburre, satura, resulta claramente ajeno, impostado, tributario de ambiciones particulares; los actores evidencian sus torpezas, su falta de capacidad, de habilitación, su nula sensibilidad e impermeabilización respecto al entorno. Cuando apenas están naciendo, los partidos se encuentran en crisis, aislados socialmente, entrampados en soliloquios egocéntricos, obnubilados por el poder y el dinero y la ambición que los empuja, que los mantiene unidos a pesar de sus disputas internas que los paralizan.

ALTERNATIVAS ANTE EL DESORDEN DE LOS DE ARRIBA

En general, el gobierno del cambio representados por Vicente Fox y el PAN, como los gobiernos locales del cambio de los otros partidos, viven en el desorden permanente, en la puesta en práctica de políticas erráticas que reproducen la desigualdad, el debilitamiento de la economía, el desgarramiento del tejido social y la pérdida de viabilidad de la nación, no solamente por la porosidad de las fronteras acarreada por la mundialización neoliberal, sino por la supeditación económica, social y política al imperio del Norte. De Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) a Fox, la nación mexicana ha estado siendo desarticulada, desgarrada, desprovista de recursos nacionales y de políticas que reafirmaran su consistencia, su viabilidad como nación independiente si bien incorporada en forma autónoma en un planeta sin resquicios, pero plagado de contradicciones y recomposiciones imperiales.

La pérdida de identidad y viabilidad de la nación se da porque el país entero, su economía, sus instituciones, su sociedad, sus pueblos, han sido transfigurados bajo el embate de la mundialización neoliberal, de las transformaciones materiales y culturales que sobreponen una pretendida “occidentalización” (norteamericanización) que hace tabla rasa y desmantela tradiciones, historias y culturas originarias, locales y nacionales, propias. Así, no solamente economía y formas políticas se ponen a tono y ritmo de la hegemonía neoliberal hoy fragilizada a pesar de todo, sino que también se busca derrocar, deslavar la historia, la vida de pueblos y sociedades mucho más diversas y ricas que las impuestas por el desarrollo tecnológico y el poder mediático.

El gobierno de Vicente Fox, los distintos actores institucionales bajo la forma de partidos, parecen conducir al país a la deriva, sin rumbo, azotado violentamente por los vientos huracanados de la guerra expansiva, la economía mundial oligopólica y oligofrénica preñada de crisis y la inestabilidad de instituciones políticas vaciadas de contenido social y deslegitimadas ante sociedades que se resisten a la exclusión, a la simple calidad de espectador de espectáculos perversos y degradados de los otros, del poder o de los poderes pervertidos y ve-

nidos a menos. Sin embargo, no hay que engañarse y apreciar sólo el desorden o la impericia de un piloto frívolo e ignorante o la ambición y torpeza corrupta y desprogramada de la clase política toda. De cualquier manera actúan bajo los parámetros irrecusables del neoliberalismo que consideran una fatalidad ineludible, por lo que lo primero que se daña son las condiciones de vida y de trabajo, materiales y culturales, de los trabajadores, de las capas sociales subordinadas.

Por esto mismo se confiscan o reducen los espacios públicos, la esfera de lo político que resguarde lugares espaciosos y diversos donde la población pueda inconformarse, resistir, rebelarse. Desmantelar lo social, disgregar todo lo colectivo es condición para el neoliberalismo mexicano para imponer su sociedad política de responsabilidad limitada y admisión reservada en que ha transformado la política institucional, la política meramente estatal, la política del poder. La apuesta es impedir la formulación y sobre todo la organización de alternativas autónomas que actúen bajo reglas y lógicas distintas a las del mercado y en cambio prioricen la comunidad. Esto es, que rechacen la excluyente y opresiva situación reproducida por el neoliberalismo bajo la forma de un orden capitalista arrasador y fatal, y al contrario busquen armar desde ahora una trama de relaciones, organizaciones y políticas que minen el imperio del dinero y la individualidad perversa y apunten hacia un futuro igualitario, justo, libertario.

Contra esto último actúan todos los actores institucionales, del PAN al PRD, pasando por el PRI y los gobiernos y representantes institucionales de todos los rincones del país. Todo el régimen político, sus reglas de financiamiento, organización, gestión y representación, están hechas para no permitir la irrupción de los otros actores excluidos, despreciados y temidos sin diferencias ni resquicios.

La atmósfera política sórdida, extremadamente contaminada por la mercadotecnia y la degradación de la política institucional (polarizada por la actuación de la pareja presidencial), apuestan al desorden y el caos como una manera de expandir y sembrar por todas partes desconfianza, desaliento y apatía en la sociedad. Por esto no extraña que la campaña electoral de 2006 para renovar la presidencia de la República se haya caracterizado por la imposición de una política de miedo que llevó al extremo la polarización de la sociedad. Una sociedad paralizada dejaría espacios de maniobra a los montajes y políticas del espectáculo por más deprimentes y pésimos que fueran. Una sociedad movilizadada, crítica, no dejará de resistir la estupidez y la agresión económica y política que reproduce el neoliberalismo. Por esto los caminos de los partidos y demás actores institucionales se cruzan sin encontrarse con los senderos que va abriendo la sociedad, sus comunidades, pueblos, componentes colectivos.

La crisis política que evidentemente caracteriza la coyuntura mexicana es en realidad la crisis de ellos, de la clase política, del poder de los privilegiados engeguados por su largo y aparentemente indisputado poder. La democracia restringida que alimentan no se resuelve en una reorganización completa de la vida de la sociedad pues ha derivado en una opción excluyente, de unos cuantos, elitaria, sólo para la llamada clase política. Los otros, los excluidos, los de abajo, la sociedad que resiste, que mantiene su filo crítico y hasta la ironía como condiciones de su existencia, apenas comienza a reanudar vínculos, a atar cabos, a recuperar sus tradiciones organizativas, políticas y culturales diezmadas por los de arriba. No vive ninguna crisis, a no ser la del alumbramiento. Se prepara para actuar, para resistir, para sacudirse inercias y enajenaciones impuestas, para buscar revertir una relación de fuerzas desfavorable. Apenas comienza a andar sigilosa, decididamente, sin prisas, como aquella madrugada del año nuevo de 1994. Frente a la crisis de la política estatal y el estrechamiento del espacio público de la sociedad, EZLN inició la *Otra Campaña* como la manera de ir reconstruyendo el tejido social y las posibilidades de otra política que descansa en la autoorganización de la sociedad.

En las luchas, en los intentos de recomposición de las organizaciones, en la defensa de las autonomías, el autogobierno y la autoorganización, hasta en la mera irritación y protesta, precisamente se va labrando –al margen de la política estatal y de la sociedad política institucional–, otra forma de hacer política, la política de los oprimidos, la política entendida en tanto resistencia vital de trabajadores, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, intelectuales, etc. La política que no se deja atrapar por el presente, sino que lo vive mirando el futuro.

La política estatal y la política de abajo no parece que puedan cruzarse, siguen caminos diferentes y sus actores y destinos serán sin duda diversos. Ante el escándalo de la lucha por el poder sin alternativas que enfrenta a todos los partidos en la campaña electoral permanente que caracteriza al régimen reactualizado, la sociedad necesita avanzar en su reorganización desde abajo, ensayando formas inéditas de reorganización y participación democráticas, bregando por delinear disyuntivas políticas que pugnen por la justicia, la igualdad y la libertad de hacer otra política. Otra política verdaderamente democrática que valide y ejerza todos los derechos sin discriminación ni limitación alguna, que posibilite la formulación colectiva de alternativas de organización, convivencia y autogobierno. Otra política que no se reduzca a lo partidario-estatal ni a la reyerta por los pretendidos o reales espacios de poder, sino que ensanche sin parar el ámbito de lo político, del encuentro y la forja de decisiones colectivas sobre la vida de todos, y lo reproduzca por todas partes, en todos los niveles y di-

mensionen, manchándolo con lo social. Otra política colectiva forjada por abajo que se articule con las resistencias planetarias en contra de la mundialización capitalista y la guerra y que permita así preparar desde ahora una democracia verdaderamente participativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Anguiano, Arturo 1999 “México: crisis de un régimen de Estado-partido” en *Región y sociedad, revista de El Colegio de Sonora* (Hermosillo) Vol. 11, N°18, julio-diciembre.
- Anguiano, Arturo (ed.) 2001 *Después del 2 de julio ¿dónde quedó la transición? Una visión desde la izquierda* (México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco).
- Anguiano, Arturo 2005a “La política como pesadilla” en *Rebeldía* (México:) N° 30, abril.
- Anguiano, Arturo 2005b “El desafuero de López Obrador y la crisis política que no cesa” en *Viento sur* (Madrid) N° 81, julio.
- Espinosa Valle, Víctor Alejandro y Riondo, Luis Miguel (eds.) 2005 *Después de la alternancia: elecciones y nueva competitividad* (México: UAM-A/Ediciones Eon).
- Flores Olea, Víctor 2004 *Tiempos de abandono y esperanza* (México: Siglo XXI).
- Garavito, Rosa Albina 2006 “Un nuevo sujeto social: los zapatistas del siglo XXI” en Anguiano, Arturo (ed.) *Imperio y Resistencias. Dominación, migración, resistencias y alternativas*, Memorias del Coloquio Internacional, México, UAM-X, del 4 al 7 de octubre de 2005.
- Krauze, Enrique 1997 *La presidencia imperial* (México: Tusquets).
- Roux, Rhina 2006 “La Otra campaña” en *Bajo el volcán - Revista del Posgrado de Sociología* (Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) Año 6, N° 10.
- Subcomandante Insurgente Marcos 2004 “Leer un video” en *Rebeldía* (Separata) N° 23, setiembre.
- Subcomandante Insurgente Marcos 2005 “La (imposible) ¿geometría? del poder en México” en *Rebeldía* (Separata) N° 32, junio.
- Zamora, Guillermo 2006 *El año de la izquierda en México* (México: Colibrí).